

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada Ponente

Auto - Ejecutivo	
EJECUTANTES	MARÍA ELENA ARISTIZÁBAL GARZÓN
EJECUTADO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-019-2018-00519-01
TEMA	Excepción de pago
DECISIÓN	Confirma.

Medellín, nueve (9) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Estudiado, discutido, y aprobado en Sala virtual.

Esta Sala asume la competencia en esta instancia, conforme a la regulación establecida por el Gobierno Nacional en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “*por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*”; en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de Junio de 2020 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En consecuencia, conforme al trámite establecido en las citadas disposiciones, que habilitan el procedimiento escrito, y cumplido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a desatar el auto interlocutorio apelado, dentro del

presente proceso ejecutivo laboral conexo, promovido por la señora **MARÍA ELENA ARISTIZÁBAL GARZÓN** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 018**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I.- ANTECEDENTES

Para lo que a esta decisión interesa, es preciso reseñar que la señora **MARÍA ELENA ARISTIZÁBAL GARZÓN**, actuando a través de apoderada judicial, formuló demanda ejecutiva laboral contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, para que se libre **MANDAMIENTO DE PAGO** a su favor, por los siguientes conceptos:

“PRIMERO: Por la suma de \$35.237.917, como capital insoluto por concepto de mesadas retroactivas de la pensión de vejez causadas entre el 3 de diciembre de 2010 y el 31 de marzo de 2015.

SEGUNDO: Por las mesadas causadas a partir del 1 de abril de 2015, en cuantía mensual de un salario mínimo mensual legal vigente.

TERCERO: Por el interés moratorio del artículo 141 de la ley 100 de 1993, causadas sobre las mesadas de la pensión de vejez reconocidas conforme los numerales anteriores, desde el 3 de diciembre de 2010.

CUARTO: Condenar a la entidad demandada, al pago de las costas procesales y agencias en derecho.”

Como hechos relevantes, narró que a la ejecutante le fue reconocida judicialmente una pensión de vejez en cuantía mínima a partir del 3 de diciembre de 2010, ordenándose a su favor un retroactivo pensional calculado en la suma de \$32.237.917, sobre el cual se dispuso el pago de los intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993, los cuales debían ser liquidados por

COLPENSIONES, a partir del 3 de diciembre de 2010 y hasta el momento en que se produjera el pago efectivo de las mesadas que componen el retroactivo adeudado, decisión que fue confirmada e segunda instancia mediante providencia del 11 de febrero de 2016.

Y que una vez quedo ejecutoriada la sentencia, se liquidaron las costas y agencias en derecho en primera instancia, en cuantía de \$7.047.583.

También señala el escrito introductorio, que se presentó cuenta de cobro ante la entidad accionada el día 14 de junio de 2018, pero la entidad solo realizó el pago de las costas y agencias en derecho, quedando pendiente de pago las demás condenas, tardanza que debe ser resarcida con los intereses legales del 0.5% mensual o en su defecto con la indexación.

Mediante proveído del 22 de noviembre de 2018, la juez de primer grado accedió a librar mandamiento de pago por los conceptos solicitados, y dispuso la notificación personal del mandamiento de pago a la parte ejecutada.

La apoderada judicial de la parte ejecutada, dentro del término de traslado otorgado, se opuso a la totalidad de pretensiones formuladas y propuso las excepciones de mérito que denominó: “*prescripción; pago; compensación; y falta de exigibilidad del título ejecutivo*”.

Y luego mediante memorial del 14 de enero de 2019, esta misma apoderada judicial, adjunta copia de la resolución N° SUB-322783 del 12 de diciembre de 2018, donde supuestamente se da cumplimiento a la sentencia de primera instancia.

II. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE ALZADA:

En la audiencia de resolución de excepciones realizada el día 3 de mayo de 2019, el JUZGADO DIECINUEVE LABORAL DEL CIRCUITO DE

MEDELLÍN, DECLARÓ probada parcialmente la excepción de “PAGO” propuesta por la apoderada judicial de COLPENSIONES, y ordenó seguir adelante con la ejecución de los siguientes conceptos:

- Por la suma de \$3.145.518, por la diferencia de intereses moratorios.
- Por las costas del proceso ejecutivo, a cargo de COLPENSIONES y a favor de la parte ejecutante, fijándose como agencias en derecho el equivalente al 10% del valor aprobado o modificado de la liquidación del crédito.

Como fundamento de su decisión, estimó la juez de primer grado que lo pagado por la entidad ejecutada a través de la resolución N° SUB-322783 del 12 de diciembre de 2018, resultado deficitario, únicamente en relación con la condena por intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993, pues el valor reconocido por la entidad ejecutada (\$68.830.949) es inferior al valor liquidado por la a quo (\$71.976.467), y por ello resulta procedente, seguir adelante con la ejecución del mayor valor, esto es, la suma de \$3.145.518.

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La referida decisión fue recurrida en apelación, por la apoderada judicial de la entidad ejecutada, quien expresó su inconformismo frente a la declaratoria parcial de la excepción de pago, pues esta debió ser acogida en forma total, toda vez que la entidad accionada dio cumplimiento total a la obligación impuesta, a través de la resolución SUB-322783 del 12 de Diciembre de 2018, además la liquidación de los intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993, se hizo conforme a lo ordenado en la sentencia ordinaria laboral.

Alegatos de conclusión:

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el apoderado judicial de COLPENSIONES, Dr. JUAN GABRIEL TORO TORO portador de la T.P. N° 292.949 del C. S. de la J., presentó sus alegatos de conclusión en esta instancia, mediante los cuales le solicita a este tribunal, se revise la decisión de primera instancia en cuanto en los términos del artículo 461 del Código General del Proceso, aduciendo que la entidad ejecutada, dio cumplimiento cabal a la obligación contraída mediante sentencia judicial que puso fin al proceso ordinario laboral adelantado por el acá ejecutante, debiéndose dar por terminado el mismo y archivar las respectivas diligencias.

Al referido apoderado judicial se le reconoce personería para actuar en los términos del memorial de sustitución poder allegado al plenario.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

Desatará la Sala el recurso de alzada interpuesto, tomando en consideración los puntos de inconformismo que sustentan dicho recurso, al tratarse de una providencia judicial que al tenor de lo dispuesto por el artículo 65 del CPT y SS., es recurrible en apelación.

La cuestión jurídica a resolver en esta instancia judicial, se circunscribe a desatar la apelación presentada a instancias de la parte ejecutada, sobre el auto interlocutorio a través del cual se declaró parcialmente probada la excepción de pago, pues según la apoderada judicial de COLPENSIONES, la entidad no adeuda suma alguna a la ejecutante MARÍA ELENA ARISTIZÁBAL GARZÓN, y mucho menos por concepto de intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, toda vez que la suma reconocida en la resolución N° SUB-322783 del 12 de Diciembre de 2018 (\$68.350.949), se encuentra acorde a lo ordenado en la sentencia declarativa.

Sea lo primero, -a efectos de resolver lo pertinente-, recordar que, en el proceso ejecutivo conexo, el grado de semejanza que debe existir entre la parte resolutive de la sentencia ordinaria y la orden judicial de ejecución, es absoluta.

Tal exactitud funge como garantía de que la ejecución solo se adelantará por las obligaciones claras, expresas y exigibles que fueron impuestas en la sentencia resultante del proceso ordinario. Así, de un lado el título ejecutivo funge como garantía crediticia para el acreedor, ya que el mismo incorpora los derechos precisos que pueden hacerse exigibles por la vía ejecutiva, sin que pueda interpretarse con alcance restringido lo esencialmente contenido en el mismo; y al mismo tiempo, este comporta garantía para el deudor, quien conforme a la incorporación precisa y exacta del derecho, no podrá ser perseguido en sus bienes y eventualmente ejecutado en un juicio, por ninguna obligación o importe que no contenga el propio documento.

Ello por cuanto, la fuerza de ejecutividad patrimonial del título ejecutivo (sentencia ordinaria) en contra del deudor (vencido en juicio en el proceso ordinario), no alcanza a comprender una nueva disputa de orden social.

Ir más allá de las obligaciones contenidas en la sentencia ordinaria, indudablemente significaría desbordar el alcance del crédito que contiene la providencia, y evidentemente ese ir mas allá situaría al sujeto de derechos en el escenario del proceso ordinario, y no del juicio ejecutivo.

Conforme a la jurisprudencia nacional, el “*que la obligación sea expresa, quiere decir que se encuentre debidamente determinada, especificada y patente. Que sea clara: Esto es, que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (crédito) como sus sujetos (acreedor y deudor). Que sea exigible: Significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido esta*” (Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 22 de junio de 2001, Consejero

Ponente Ricardo Hoyos Duque, Radicado 44001-23-31-000-1996-0686-01(13436).

CASO CONCRETO

A efectos de establecer el monto de lo adeudado en este caso, resultante de las obligaciones impuestas por la Judicatura a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, la Sala consultó las pretensiones reconocidas a la señora MARÍA ELENA ARISTIZÁBAL GARZÓN en el título ejecutivo constituido por las sentencias de primera y segunda instancia de fechas 27 de abril de 2015 y 11 de febrero de 2016, visibles a folios 92 al 96 y 104 al 105 del plenario.

Para tal efecto, la Sala transcribe a continuación los numerales de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia que contienen las condenas por concepto de retroactivo pensional e intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, así:

“PRIMERO: Se CONDENA a la administradora colombiana de pensiones – Colpensiones, al reconocimiento y pago a la señora MARÍA ELENA ARISTIZÁBAL GARZÓN identificada con cedula de ciudadanía 32.485.379 de la PENSIÓN DE VEJEZ, debiéndole reconocer un retroactivo pensional por la suma de treinta y cinco millones doscientos treinta y siete mil novecientos diecisiete pesos (\$35.237.917) causadas desde el 3 de diciembre de 2010 al 31 de marzo de 2015

SEGUNDO: Se ORDENA a COLPENSIONES a que a partir del 1° de abril de 2015, reconozca una mesada de \$644.350 para el 2015, correspondiente al salario mínimo mensual legal vigente sin perjuicio de los incrementos o reajustes anuales, y las mesadas adicionales de junio y diciembre hasta que la ley lo permita.

TERCERO: Se CONDENA a COLPENSIONES a reconocer sobre el valor de las mesadas cuyo pago se acaba de ordenar, los INTERESES MORATORIOS previstos en el Artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 3 de diciembre de 2010 y hasta cuando haya de producirse su pago efectivo, los que deberá liquidar a la tasa máxima vigente para el momento del pago, según lo expuesto en la parte motiva de este proveído.”

Observa la Sala que la condena por intereses moratorios fue delimitada únicamente en su extremo inicial **3 de diciembre de 2010**, pues al desconocerse la fecha de pago del retroactivo adeudado, era imposible una liquidación en concreto de esta condena, lo que dio lugar a la orden en abstracto que como obligación de hacer le correspondía a COLPENSIONES.

En cumplimiento a lo ordenado en esta providencia, y luego de formularse la acción ejecutiva conexas, COLPENSIONES expidió la resolución N° SUB-322783 del 12 de diciembre de 2018, en la que se liquidó a título de intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 la suma de \$68.830.949, causados entre el 3 de diciembre de 2010 y el 30 de diciembre de 2018, advirtiéndose en el ARTÍCULO SEGUNDO de la parte resolutive del citado administrativo lo siguiente: “... La presente prestación junto con el retroactivo si hay lugar a ello, será ingresada en la nómina del periodo 2019-01 que se paga en el periodo 2019-02...”

Así las cosas, teniendo en cuenta que la entidad accionada acepta haber liquidado los intereses moratorios hasta el 30 de diciembre de 2018, y que su vez el pago de la obligación se efectuó en el mes de febrero de 2019, es evidente para esta colegiatura que la liquidación realizada por valor de \$68.830.949, es deficitaria, pues la fecha de liquidación no coincide con la fecha de pago, que es precisamente lo ordenado en la sentencia de segunda instancia, y el tenor literal del art. 141 de la Ley 100 de 1993 “...*en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago....*”.

En consecuencia, esta Sala procedió a calcular el valor de la condena por intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, por el periodo comprendido entre el 3 de diciembre de 2010 y el 1° de febrero de 2019, teniendo en cuenta para ello la tasa nominal diaria correspondiente al mes de febrero de

2019, según consta en la tabla de liquidación que se ordena incorporar al expediente, y que arroja la suma de \$73.087.620, misma que al descontarle lo ya pagado por COLPENSIONES en la resolución N° SUB-322783 del 12 de diciembre de 2018, por valor de \$68.830.949, nos arroja un resultado de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$4.256.671)**, advirtiendo la Sala que la tasa de intereses del **0.0720576%** fue obtenida teniendo en cuenta el concepto N° 2006022407-0002 del 8 de agosto de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia, según el cual las tasas nominales al ser una función lineal si permiten ser divididas a fin de obtener la tasa nominal periódica, de lo anterior se desprende que el intereses moratorio diario es el producto de convertir la tasa de interés efectiva anual del a su equivalente nominal y este producto dividirlo en 365.

Sin embargo, como el valor obtenido por la Sala, resulto superior al liquidado por la juez de primer grado (\$3.145.518), y no puede agravarse la situación de apelante único, en virtud del principio de la “*no reformatio in pejus*”, se dejará incólume el valor liquidado en la primera instancia por concepto de mayor valor de los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, sobre el cual se ordenó seguir adelante con la ejecución, no habiendo lugar a declarar probada totalmente, la excepción de pago propuesta por COLPENSIONES.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida, y la improsperidad del recurso de apelación formulado por la apoderada judicial de COLPENSIONES, las costas procesales en esta instancia, estarán a cargo de la parte ejecutada y a favor de la parte ejecutante, de conformidad con lo dispuesto en el art. 365 del Código General del Proceso, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de \$454.263.

V. D E C I S I Ó N

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto objeto de apelación de origen y fecha conocidos, según lo expuesto en las consideraciones que anteceden.

SEGUNDO: Costas procesales en esta instancia, a cargo de la parte ejecutada y a favor de la parte ejecutante, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de \$454.263.

TERCERO: Se ordena notificar lo resuelto en estados virtuales y la devolución del expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados:


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 059 del 12 de abril de 2021.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>